



EJECUCIÓN DE CONTRATOS MERCANTILES
E HIPOTECAS
EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Indicadores de confiabilidad
y desarrollo institucional local

CONSEJO COORDINADOR FINANCIERO

2009

CONSEJO COORDINADOR FINANCIERO, A.C.

ASOCIACIÓN DE BANCOS DE MÉXICO, A.C.
Lic. Enrique Castillo Sánchez Mejorada
Presidente del CCF

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERMEDIARIOS BURSÁTILES, A.C.
Act. José Marcos Ramírez Miguel

ASOCIACIÓN MEXICANA DE FACTORAJE FINANCIERO Y ACTIVIDADES SIMILARES, A.C.
Ing. Víctor Portillo Sánchez

ASOCIACIÓN MEXICANA DE CASAS DE CAMBIO, A.C.
Lic. José Antonio Abel Ramírez Rodríguez

ASOCIACIÓN MEXICANA DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE ARRENDAMIENTO, CRÉDITO Y FACTORAJE, A.C.
Lic. Pablo León de la Barra R.

ASOCIACIÓN DE ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO, A.C.
Ing. Benjamín Wollenstein Neiman

ASOCIACIÓN DE CÍAS. AFIANZADORAS DE MÉXICO, A.C.
Lic. Jorge Rodríguez Elorduy

ASOCIACIÓN MEXICANA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, A.C.
Lic. Eduardo Silva Pylypciov

ASOCIACIÓN MEXICANA DE ENTIDADES FINANCIERAS ESPECIALIZADAS, A.C.
Lic. Mario Sandoval Chávez

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUCIONES DE SEGUROS, A.C.
Lic. Juan Ignacio Gil Antón

ASOCIACIÓN DE BANCOS DE MÉXICO, A.C.
Lic. Juan Carlos Jiménez Rojas
Director General del CCF

© 2009, Consejo Coordinador Financiero, A.C.
16 de Septiembre Núm. 27
Centro Histórico
06000 Cuauhtémoc, D.F.

Coordinador de la obra:
José Luis Bracho Ortiz
Gerardo Calderón Venegas

INVESTIGACIÓN ITAM

Carlos Bernal Vereza, Coordinador
Lorena López Ángel
Karina Ansolabeheres
Javier Patiño García
Mirna Sernas Hernández

SUPERVISIÓN Y ASESORÍA

Jorge Gaxiola Moraila
Luz María Sobrino Corzo



SB Publicidad
Aniceto Ortega 1006, Col. Del Valle,
Deleg. Benito Juárez, C.P. 03100, México, D.F.,
Tel. 5601 8602

Tiraje: 2,000 ejemplares
Marzo 2009

CONTENIDO

Introducción	7	Guanajuato	104
Marco conceptual	9	Guerrero	109
Metodología de investigación	13	Hidalgo	114
Resultados generales	21	Jalisco	119
Calidad institucional	23	Michoacán	124
Duración de los procedimientos mercantiles	31	Morelos	129
Eficiencia en la ejecución de las sentencias	35	Nayarit	134
Suficiencia y aplicación eficiente de recursos humanos y materiales	37	Nuevo León	139
Gráficas de tiempo	41	Oaxaca	144
Resultados por entidad	47	Puebla	149
Aguascalientes	49	Querétaro	154
Baja California	54	Quintana Roo	159
Baja California Sur	59	San Luis Potosí	164
Campeche	64	Sinaloa	169
Coahuila	69	Sonora	174
Colima	74	Tabasco	179
Chiapas	79	Tamaulipas	184
Chihuahua	84	Tlaxcala	189
Distrito Federal	89	Veracruz	194
Durango	94	Yucatán	199
Estado de México	99	Zacatecas	204

Bibliografía	209	V. Relación de Tribunales Superiores de Justicia que enviaron la información solicitada y principales resultados	242
Anexos	211	VI. Puntuación Máximo, Mínimo y Promedio de Componentes	243
I. Tabla de Temas, Rubros y Componentes, y sus Ponderaciones	213	VII. Porcentajes que en cada Ejercicio representan el Presupuesto del Poder Judicial respecto al Presupuesto General de cada Entidad	246
II. Cuestionario para Abogados	216	VIII. Observaciones de los Tribunales Superiores de Justicia	247
III. Cuestionario para Tribunales Superiores de Justicia	235		
IV. Guías de visitas de apreciación a salas civiles	239		

INTRODUCCIÓN¹

Las instituciones dan estructura a las interacciones políticas, económicas y sociales. De esta manera crean tanto restricciones informales como reglas formales hechas para crear orden y reducir la incertidumbre.

Douglass C. North.

Alrededor del mundo los procedimientos judiciales y su regulación, en determinadas materias, resultan de gran relevancia para el desarrollo de las distintas economías. Esto se debe, en parte, a que los empresarios o inversionistas analizan ciertos factores o indicadores para saber si sus inversiones estarán suficientemente protegidas dentro un territorio determinado. Por lo tanto, el tiempo, costo, imparcialidad, calidad de los juzgadores, entre otros, pueden ser factores o indicadores relevantes para que los empresarios decidan establecer sus negocios en determinada jurisdicción. Estudios como el de Dani Rodrik y Arvind Subramanian “*La Primacía de las Instituciones*” establecen la importancia que tiene la calidad de las instituciones para el desarrollo económico, ya que mejores instituciones y mayor protección a los derechos de propiedad incrementan la inversión. Inclusive afirman que dicha calidad guarda una correlación importante con el ingreso de un país.

Por ello, el desarrollo económico se encuentra ligado a la fortaleza y credibilidad de las instituciones que garantizan los derechos de los ciudadanos. De esta manera, los historiadores económicos reconocen a las instituciones como uno de los factores principales que inciden directamente en el crecimiento económico, así como el entendimiento de la interacción de éstas con otros agentes relevantes. Para comprender lo anterior, también puede tomarse en cuenta lo que establece Douglass C. North en su artículo “*Instituciones*”, ya que comenta que muchas veces las instituciones se crean para reducir costos de transacción, mismas que para ser efectivas deben estar investidas

del elemento de la coercitividad, de lo contrario serían ineficaces.

La importancia de las instituciones radica en el grado de solidez, calidad, credibilidad y eficacia de las mismas, que tienen dentro de sus objetivos la protección de los derechos de propiedad. Debido a ello, la creciente exigencia de una evaluación sobre la calidad de las instituciones, por parte de los usuarios e inversionistas.

La evaluación de calidad, antes mencionada, involucra factores subjetivos encargados de generar la información. Consecuentemente el resultado no es fácil de obtener y dependerá del grado de percepción de los agentes públicos y privados. Por lo tanto la variable “calidad” representa un elemento subjetivo y, por lo tanto, difícil de evaluar.

El objetivo fundamental del presente estudio es brindar al lector un diagnóstico sobre el nivel de eficiencia de las instituciones públicas locales, considerando aspectos de los poderes judiciales, ejecutivos y legislativos locales, que intervienen en el proceso de ejecución forzosa de contratos mercantiles e hipotecas. Es por ello que el estudio no presenta resultados sobre la calidad intrínseca de los poderes judiciales locales, es decir, sobre las mejoras realizadas por dichas instituciones, desarrollo de sistemas de acceso a la justicia, ni por la justicia en sí misma. De esta manera, se presenta un diagnóstico sobre la percepción de abogados litigantes especializados en el tema, sobre la calidad de las instituciones encargadas de la ejecución de contratos mercantiles e hipotecas en las diversas entidades federativas del país. Asimismo, el estudio toma en cuenta otras fuentes de información como datos oficiales, visitas de apreciación directa de los encuestadores, información proporcionada por los propios poderes judiciales de las entidades federativas e información pública, según se describe en la sección de Metodología de Investigación.

¹ El presente trabajo es el quinto de una serie de estudios de percepción sobre la ejecución de contratos mercantiles e hipotecas en las entidades federativas, que el ITAM (Instituto Tecnológico Autónomo de México), conjuntamente con el despacho Gaxiola, Calvo, Sobrino y Acevedo, S.C. con la participación de Moody's de México, S.A. de C.V. y con el patrocinio del Consejo Coordinador Financiero ha realizado.

A pesar de los retos de desarrollar un estudio de opinión y de construir indicadores que no reflejan necesariamente todas las condiciones del desempeño de las instituciones encargadas de ejecución de contratos mercantiles e hipotecas, la ubicación de las entidades federativas es una señal para que las mismas tomen acciones para propiciar condiciones más favorable para el desarrollo de la ejecución de dichos contratos.

El estudio se encuentra organizado de la siguiente manera:

1. Desarrollo del marco conceptual como manera de justificación teórica y práctica.
2. Metodología de investigación adoptada.
3. Resultados obtenidos a escala nacional.
4. Resultados por entidad federativa.

MARCO CONCEPTUAL

Como se mencionó en la parte introductoria del presente trabajo, el desarrollo económico se encuentra ligado a la fortaleza y credibilidad de las instituciones que garantizan los derechos de los ciudadanos, esto se debe a que las instituciones establecen las reglas del juego dentro de una sociedad o, más formalmente, establecen directrices impuestas por los hombres que delimitan la interacción que se desarrolla dentro de la misma.

De este modo, podemos decir que en toda sociedad, sistema político, económico y grupos sociales en general, se hacen presentes “frecuencias de transacciones”, que se pueden considerar como una fuente de cohesión que mantiene unido a un sistema de relaciones humanas (Stuart, 1991).

Coase, en su artículo presentado en 1937, es de los primeros investigadores que se preocupa en resaltar la existencia de otros costos presentes en el desarrollo de una actividad económica: los costos de transacción. Es por ello que economistas como Williamson (1985) desarrollan estos conceptos, poniendo de manifiesto que dichos costos no se pueden evitar del todo, pero que los contratos que efectúan los particulares son los puntos de conexión para reducir dichos costos.

Las instituciones establecen las reglas que deberán seguir los distintos actores para desarrollar las actividades que están reguladas por ellos, en este caso, la actividad económica. A su vez, las instituciones con que cuenta una sociedad hacen valer el intercambio de los derechos de propiedad, esto con el fin de asegurar que el intercambio se de correctamente. En consecuencia, las instituciones estructuran incentivos para el intercambio económico, político o social. Por lo tanto, podemos establecer que entre las principales funciones de las instituciones en una sociedad se encuentra el reducir la incertidumbre a través del establecimien-

to de estructuras para la interacción humana (North, 1990).

De esta manera, mediante la celebración de contratos se pueden reducir los costos de transacción entre los actores, de esta manera, resulta de gran importancia la celebración de los mismos basados en las reglas establecidas por las instituciones. Los individuos al momento de realizar contratos delimitan las formas por medio de las cuales podrán realizar intercambios comerciales, de servicio, financieros, entre otros.

En las diversas transacciones llevadas a cabo por los distintos agentes, cada una de las partes busca obtener un beneficio en las diferentes operaciones realizadas; sin embargo, para poder obtener una posición favorable de este hecho es necesario diseñar, elaborar y establecer contratos *ex ante* de la transacción, así como vigilar *ex post* su cumplimiento, como lo establece Matthews (1987).

Los costos *ex ante* “son los costos de redacción, negociación y salvaguarda, de un acuerdo” (Williamson; 1985). Es a través de estos medios como los agentes buscan mantenerse más protegidos o reducir la incertidumbre. Estos costos tienen como único objetivo: brindar cierta protección y reducir la incertidumbre a la hora de realizar transacciones entre agentes o instituciones, así como cuidar el cumplimiento de los mismos.

Los costos *ex post* se refieren principalmente a los costos de ejecución de los contratos, es decir, cuando los lineamientos establecidos por las partes de un contrato no son seguidos por alguna de ellas o por ambas. De esta manera, nos encontramos frente a los costos de ejecución de los contratos.

Un elemento importante que guarda relación con la celebración de contratos y con las transacciones

en general son “las instituciones y la forma en que se desarrollan en el comportamiento económico; junto con la tecnología empleada, ellos determinan los costos de transacción y producción” (North, 1990). El papel que las instituciones juegan en las diversas transacciones en muchos de los casos son decisivas; ellas contribuyen a reducir los costos de las diferentes actividades económicas. Esta reducción de costos, según North, se realiza a través de las reglas institucionales, dado que si se hace uso de éstas, se reduce en buena medida la incertidumbre.

Las instituciones establecen una mejor regulación de la interacción entre los individuos y dicha regulación se puede dar a través de instituciones formales e informales. Nos referimos a las formales como aquéllas que hacen uso de ordenamientos jurídicos para regular las conductas humanas; y las informales como aquéllas que hacen uso de valores, costumbres, tradiciones, de la cultura, etcétera; a su vez, el mismo North plantea que “las instituciones no sólo contribuyen a reducir los costos de transacción, sino que éstas también pueden generar barreras o limitaciones en las transacciones” (North, 1990).

Los elementos que se han mencionado tienen incidencia en las transacciones entre los distintos agentes, ya sea para crear mayor certidumbre o para incrementar la incertidumbre en las negociaciones. Es por ello que muchos actores dan mayor certidumbre a su actividad económica mediante la celebración de contratos, es decir, en las diversas transacciones efectuadas por los individuos generalmente se elaboran contratos que pueden estar respaldados por instituciones formales o informales como lo concibe Douglas North; o pueden ser transacciones que para llevarse a cabo, necesariamente están acompañados de los costos *ex ante* o *ex post* referidos por Williamson.

Los diferentes actores intentan tener una total certidumbre sobre el cumplimiento de los contratos que celebran, desafortunadamente esto no ocurre en todas las ocasiones, por ello existe el establecimiento de reglas que permitan la intervención de instituciones que garanticen el cumplimiento de dichos contratos. Es así como los poderes judiciales de las distintas jurisdicciones participan en el cumplimiento forzoso de los contratos, es decir, si una de las partes incumple el acuerdo o ambas partes no se ponen de acuerdo en su ejecución o aplicación, recurren a un tercero que, con base en

reglas preestablecidas, resuelve los conflictos que puedan tener lugar y, de esta manera, puedan cumplir con los acuerdos anteriormente establecidos.

Los ciudadanos buscarán la intervención de este tercero, en la medida en que cuenten con cierta credibilidad sobre el buen desempeño de este, de lo contrario buscarán otras soluciones, quizá costosas, o evitarán celebrar contratos en jurisdicciones en donde el riesgo o los costos *ex post* del cumplimiento de contratos sea elevado. Esto es, los agentes económicos actuarán de acuerdo a la credibilidad que tengan sobre el buen desempeño de las instituciones que salvaguardarán sus derechos y harán cumplir las obligaciones a todos los ciudadanos.

Es por ello, que el desarrollo económico de un país se encuentra directamente relacionado con la calidad de las instituciones que regulan sus actividades. En este sentido, vale la pena resaltar la dificultad que representa la medición de la calidad de las mismas, ya que al estar determinada por variables subjetivas, la percepción que tienen de ella quienes utilizan el sistema, juega un papel importante (Macaulay et al., 1995). Asimismo, la percepción que tienen los usuarios de una institución refleja la legitimidad de que la misma goza y, en consecuencia, la observancia que hay de sus normas y juicios (Tyler, 2006).

Por lo anterior, resulta de gran importancia realizar un estudio mediante el cual se recoja la opinión de los usuarios de las instituciones, ya que esto permitirá conocer algunas de las fortalezas y debilidades de las mismas en el desempeño de sus funciones. Por lo tanto, la relevancia del presente trabajo radica en brindar información sobre la percepción que tienen abogados litigantes con amplia experiencia en la ejecución forzosa de contratos mercantiles e hipotecas, utilizando el sistema judicial. A su vez, se presentan algunos factores que se relacionan en la ejecución de dichos contratos.

Las teorías *objetivistas* defienden una postura ontológica a partir de la cual se explican fenómenos sociales como el derecho, tomándolos como fenómenos independientes de los actores sociales. En contraste, la postura *constructivista*, entiende el orden social como un fenómeno en constante movimiento y transformación (Bryman 2001). Esta última postura es la que adopta el presente trabajo, ya que se toma a las instituciones como fenómenos que cambian constantemente de acuerdo a las

necesidades de la sociedad en la que desarrollan sus funciones. Así, se considera que las normas jurídicas no operan en el vacío, sino que son interpretadas e implementadas por personas que les dan un sentido u otro: "... los derechos y obligaciones no son otra cosa que actuales o potenciales éxitos o fracasos en los tribunales" según Jerome Frank (1947). Por ello, se delimita la actuación de las instituciones sobre la aplicación de las normas, pero no se elude el elemento subjetivo que debe formar parte cuando el poder judicial resuelve sobre cada caso concreto.

Como se ha mencionado, los ciudadanos recurren al poder judicial como última instancia para hacer valer los derechos establecidos en los contratos que han celebrado, en el tema en análisis, y esperan que las decisiones que deriven de dichas actuaciones provengan de la correcta aplicación de las reglas, esto es que dichas decisiones sean justas. En términos de justicia procesal, resulta claro que las personas califican los procedimientos como justos e injustos (Tyler, 2006; Gibson, 1989).

Los procedimientos arbitrarios, retardados u oscuros son considerados "injustos" por los usuarios, teniendo como consecuencia una percepción negativa sobre su legitimidad y sobre la institución que los lleva a cabo (Tyler, 2006). De acuerdo con la teoría de *justicia distributiva*, la legitimidad es un concepto procesal (Tyler, 2006) y, de esta manera, podemos ver que las personas parecen valorar positivamente los procedimientos neutrales, aún más que los resultados favorables, teniendo así una mejor percepción de las instituciones que ofre-

cen procedimientos equitativos. En palabras de North "... el marco institucional que determina la estructura básica de la producción tiende a perpetuar el subdesarrollo [...] si los derechos de propiedad son inseguros, si las leyes se hacen cumplir a medias [...] las empresas que maximizan sus utilidades tenderán a buscar horizontes breves y poco capital fijo, y también en una pequeña escala".

Por lo tanto, las instituciones sólidas y fuertes, especialmente las que permiten la intervención del ciudadano, hacen que los conflictos puedan ser manejados al menor costo posible y previenen conflictos sociales y políticos. Asimismo, el aumento de la calidad de las instituciones mejora la calidad de la economía incrementando el ingreso (Rodrik y Subreanian, *et al*; 2003).

Si una institución lleva a cabo procedimientos neutrales, fundados, expeditos y transparentes, sus decisiones tienen mayor legitimidad y, por lo tanto, existe una mayor propensión al cumplimiento de la norma o al sometimiento voluntario del proceso.

Es fundamental promover la existencia de instituciones legítimas y eficaces, que generen confianza en los usuarios y coadyuven a un desarrollo socioeconómico sólido y sostenible. Por lo tanto, el presente estudio muestra la percepción que tienen los usuarios calificados y expertos en materia mercantil acerca de las instituciones y los procedimientos relacionados con la impartición de justicia en la ejecución de contratos mercantiles e hipotecas en las entidades federativas mexicanas.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

INSTITUCIONES, CONTRATOS Y CONFIANZA

Este trabajo es un estudio descriptivo sobre la opinión (percepción) que tienen abogados de las instituciones financieras en los diferentes estados de la República Mexicana, sobre los procedimientos judiciales mercantiles. Los resultados no son probabilísticos ya que provienen de fuentes seleccionadas por criterios no aleatorios, ni representativos.

Específicamente, las fuentes de información para este estudio fueron: (a) principalmente las respuestas a los cuestionarios de 141 preguntas respondidos por abogados litigantes expertos en juicios mercantiles e hipotecarios (Anexo II), (b) las respuestas a los cuestionarios enviados a los Tribunales Superiores de Justicia locales² (Anexo III); y (c) los datos obtenidos de las guías sobre visitas de apreciación a juzgados y salas realizados por los encuestadores enviados a cada entidad federativa (Anexo IV).

A continuación se presenta la metodología utilizada para el desarrollo del presente estudio en los siguientes temas: (1) selección de la muestra, (2) construcción de los instrumentos de recolección de datos, (3) aplicación de los instrumentos de recolección de datos y, (4) sistema de procesamiento de datos.

1. Selección de la Muestra

Se determinó aplicar en cada una de las entidades federativas un cuestionario a un mínimo de 3 y un máximo de 18 abogados que reunieran los siguientes requisitos:

1. Poseer un mínimo de diez años de experiencia en la sustanciación de procedimientos judiciales mercantiles e hipotecarios, y
2. Contar con reconocido prestigio profesional en el foro.

Intencionalmente, la selección de la muestra se basó en el conocimiento, prestigio y experiencia de los encuestados³. Si bien no es una muestra representativa de la población en términos estadísticos, sí es una muestra calificada por las características de los encuestados. Los abogados fueron seleccionados y convocados en cada una de las entidades federativas de la República Mexicana. Este año los cuestionarios se aplicaron a un total de 249 abogados.

Por su parte, los cuestionarios destinados a los Tribunales Superiores de Justicia fueron enviados a cada uno de éstos, recibiendo la respuesta de 28 de los 32 correspondientes a cada entidad federativa (Ver Anexo V).

Finalmente, se llevaron a cabo visitas de apreciación en los juzgados y salas de cada entidad federativa. Estas fueron realizadas por los encuestadores, quienes visitaron presencialmente las instalaciones de salas y juzgados y llenaron las guías de visita correspondientes.

2. Instrumentos de recolección de datos

Fueron utilizados tres tipos de instrumentos para la recolección de datos⁴:

- Cuestionario para Abogados.
- Cuestionario a Tribunales Superiores de Justicia.
- Guía de visita de apreciación a tribunales y salas por encuestadores.

² En algunos casos fue necesario recurrir a publicaciones de los periódicos oficiales de algunas Entidades Federativas para obtener datos, principalmente sobre presupuestos de egresos estatales y del Poder Judicial.

³ No todos los abogados —y mucho menos toda la población— cuentan con conocimientos específicos sobre el tema de interés de este trabajo.

⁴ Los cuestionarios y guía pueden consultarse en los Anexos —II, III y IV—. De igual forma, si se compara el cuestionario para Abogados de la edición pasada, se podrá observar que el número de preguntas se redujo.

Cada uno de ellos fue elaborado a partir de un proceso de discusión grupal que buscó mejorar, para este estudio, los indicadores en base a las experiencias de los estudios anteriores⁵. Para la edición de este año se realizó un rediseño de los cuestionarios, de manera que la recopilación de la información, así como su procesamiento fueran de acuerdo a estándares internacionales⁶.

Adicionalmente, se tomaron en cuenta los instrumentos de recolección de datos utilizados en los estudios que se llevaron a cabo en 2007.

Cada uno de los instrumentos contribuye para generar una medición de los siguientes temas (variables), rubros (dimensiones) y componentes (subdimensiones):

Tema	Rubro	Componente
Calidad Institucional	Percepción sobre la calidad profesional de los juzgadores	<ul style="list-style-type: none"> • Calidad profesional de los jueces • Calidad profesional de los magistrados
	Percepción sobre la calidad de las resoluciones Uniformidad de criterios	<ul style="list-style-type: none"> • Calidad de las resoluciones de jueces • Calidad de las resoluciones de los magistrados • Uniformidad de criterios
	Percepción sobre imparcialidad en los procedimientos	<ul style="list-style-type: none"> • Imparcialidad en la designación del juzgado • Imparcialidad en la programación de las actuaciones judiciales • Imparcialidad de los jueces • Imparcialidad de los magistrados
	Percepción sobre la influencia del Ejecutivo en el desempeño de la función judicial	<ul style="list-style-type: none"> • Influencia del Poder Ejecutivo en el desempeño de la función judicial
	Autonomía de los jueces y magistrados	<ul style="list-style-type: none"> • Autonomía de los jueces frente a los magistrados • Autonomía de los jueces y magistrados frente al Poder Judicial Federal
	Condiciones profesionales para el correcto ejercicio de la judicatura	<ul style="list-style-type: none"> • Carrera judicial • Calidad técnica del personal auxiliar • Inmediatez o participación activa del juez en el litigio

⁵ Cabe destacar que desde la definición del Estudio 2006 se decidió excluir la parte relativa a los Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio que había sido considerada en estudios anteriores.

⁶ Para la elaboración del diseño de las respuestas, se incluyeron las opciones de No sabe / No contesta. De igual forma, se guardó la confidencialidad de los encuestados, tal y como lo estipula el Código de Ética Profesional y Prácticas de WAPOR (World Association for Public Opinion Research).

Tema	Rubro	Componente
	Estructura y funcionamiento de los tribunales y servicios auxiliares	<ul style="list-style-type: none"> • Suficiencia de juzgados • Eficiencia de actuarios notificadores, ejecutores • Confiabilidad de los servicios periciales • Servicios de consulta de expedientes • Existencia de juzgados especializados en materia mercantil
	Controles y supervisión	<ul style="list-style-type: none"> • Controles y supervisión
	Eficiencia del ministerio público	<ul style="list-style-type: none"> • Eficiencia del ministerio público
	Idoneidad de la legislación local para la celebración y ejecución de contratos mercantiles	<ul style="list-style-type: none"> • Idoneidad de la legislación procesal en materia hipotecaria • Idoneidad de la legislación sustantiva local
Duración de los procedimientos mercantiles	Rapidez de los procedimientos mercantiles	<ul style="list-style-type: none"> • Rapidez de los juicios ejecutivos mercantiles • Rapidez de los juicios ordinarios mercantiles
	Rapidez de los procedimientos hipotecarios	<ul style="list-style-type: none"> • Rapidez de los procedimientos hipotecarios (contenciosos)
	Periodos o lapsos de inactividad procesal imputables a la autoridad judicial	<ul style="list-style-type: none"> • En los procedimientos mercantiles • En los procedimientos hipotecarios
	Rapidez en los procedimientos de ejecución	<ul style="list-style-type: none"> • Rapidez en los procedimientos de ejecución
	Duración de las diligencias de emplazamiento y notificación	<ul style="list-style-type: none"> • En los juicios ejecutivos mercantiles • En los juicios ordinarios mercantiles • En los juicios hipotecarios

Tema	Rubro	Componente
Eficiencia en la ejecución de las sentencias	Apoyo de la fuerza pública	• Apoyo de la fuerza pública
	Ejecución con independencia de simulación de procedimientos laborales	• Ejecución con independencia de simulación de procedimientos laborales
	Ausencia de criterios discrecionales que dilaten el procedimiento de ejecución	• Ausencia de criterios discrecionales de los juzgadores que dilaten el procedimiento de ejecución
	Ejecución con independencia de presiones de las partes o de terceros	• Ejecución con independencia de presiones de las partes o de terceros
Suficiencia y aplicación eficiente de recursos humanos y materiales	Presupuesto asignado al poder judicial	• Presupuesto asignado para el ejercicio 2008
	Salarios	• Salario de jueces
	Rezago	• Rezago en los juzgados • Rezago en las salas
	Condiciones materiales de los tribunales	• Condiciones materiales de los juzgados • Condiciones materiales de las salas • Recursos materiales para actuarios y notificadores
	Suficiencia de recursos humanos	• Suficiencia de recursos humanos en los juzgados • Suficiencia de recursos humanos en las salas
	Existencia de medios de acceso remoto a la información	• Boletín judicial • Acceso remoto a expedientes en los juzgados • Acceso remoto a expedientes en las salas

Preguntas Cerradas. Para la medición de cada uno de los indicadores (preguntas del cuestionario) correspondientes a cada componente (subdimensión) de cada rubro (dimensión) del tema (variable) respectivo, se utilizaron principalmente preguntas cerradas y algunas preguntas abiertas. En cuanto a las preguntas cerradas, las opciones de respuesta correspondían en su amplia mayoría a las escalas siguientes:

Escala de frecuencia

Siempre	5
Casi Siempre	3.75
A veces	2.5
Casi nunca	1.25
Nunca	0

Escala de conformidad

Totalmente de acuerdo	5
De acuerdo	3.75
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	2.5
En desacuerdo	1.25
Totalmente en desacuerdo	0

Escala de calidad

Muy buena	5
Buena	3.75
Regular	2.5
Mala	1.25
Muy mala	0

Opción disyuntiva

Sí	5
No	0

Como puede observarse, cada una de estas escalas corresponde a niveles de medición ordinal o nominal que se codificaron asignándoles números como pautas de ordenación. Se optó por asignarles una puntuación (5) a las respuestas que denotan una mayor eficiencia en la ejecución de juicios hipotecarios y mercantiles y puntuación nula (0) a las que denotan menor eficiencia. A partir de estos extremos se establecen intervalos de 1.25 puntos (resultantes de dividir cinco por cuatro intervalos).

Preguntas de Tiempo. En cuanto a las preguntas de tiempo y dependiendo de su contenido, se reescalaron los valores obtenidos. Las puntuaciones se determinaron asignando la máxima califi-

cación (5) a las respuestas que representan un sentido positivo que contribuye a elevar la eficiencia en la ejecución de los juicios y puntuación nula (0) a las que representan un menoscabo en dicha eficiencia. Por ejemplo, a las respuestas sobre el promedio de duración de un juicio ejecutivo mercantil desde su inicio hasta la resolución de primera instancia, se les asignó la máxima calificación de 5 a las que estimaban el menor tiempo posible y, por lo tanto las respuesta con la mayor duración se les asignó una calificación de 0.

Preguntas a Tribunales. En el caso del cuestionario dirigido a Tribunales Superiores de Justicia (Anexo III) se formularon preguntas cerradas correspondientes a opciones múltiples de respuesta nominal referentes a:

- Cantidad de juzgados.
- Servicio civil de carrera.
- Presupuesto del Poder Judicial.
- Remuneraciones de los jueces.
- Utilización de métodos alternativos de resolución de conflictos.
- Forma de asignación de los litigios a los juzgados.
- Transparencia y acceso a la información.
- Mecanismos de control de gasto internos y externos.
- Compilación de antecedentes.
- Modalidad de acceso al Boletín Judicial.
- Herramientas disponibles para evitar el abuso de procedimientos por parte de los abogados.

Para la puntuación correspondiente al componente de “Presupuesto asignado para el ejercicio 2008” de cada entidad federativa, se tomó la información proporcionada por los propios Tribunales Superiores de Justicia de la entidad federativa respectiva o, en su defecto, de la información disponible públicamente por medios de acceso electrónico. Se identificaron las entidades federativas con el monto mayor y el monto menor de asignación presupuestaria al Poder Judicial local.

⁵ Un total de 3 entidades federativas no contestaron el Cuestionario a Tribunales Superiores de Justicia y 9 entidades federativas lo contestaron parcialmente. A través de medios de acceso remoto se buscó dicha información respecto al Presupuesto asignado al Poder Judicial, pero cuando por esos medios tampoco se obtuvo dicha información, la puntuación de ese componente para la entidad federativa fue de 0.

⁶ Para efectos del cálculo de las puntuaciones, se suprimió la referencia a las entidades federativas de las que se carecía de información, por lo que el menor presupuesto fue asignado a aquella entidad federativa de la que se contaba con información.

⁴ La elección de las puntuaciones y los rangos fue con base a las discusiones grupales conforme a las buenas prácticas.

El monto máximo menos el monto mínimo se convirtió en la puntuación de 5. El resto de las puntuaciones de los presupuestos se obtuvieron de la siguiente ecuación:

$$\begin{array}{l} \text{Puntuación} \\ \text{Sobre} \\ \text{Presupuesto} \\ \text{Al Poder Judicial} \end{array} = \frac{(\text{Pef} - \text{Pmínimo}) * 5 / (\text{Pmáximo} - \text{Pmínimo})}{}$$

Donde:

Pef	= Presupuesto asignado al Poder Judicial en 2008 de la entidad federativa correspondiente.
Pmínimo	= Menor presupuesto asignado para el Poder Judicial 2008 de entre las entidades federativas.
Pmáximo	= Mayor presupuesto de entre las entidades federativas.

En cuanto a la puntuación correspondiente al componente de “Salarios de jueces” de cada entidad federativa, se tomó la información proporcionada por los propios Tribunales Superiores de Justicia de la entidad federativa respectiva o, en su defecto, de la información disponible públicamente por medios de acceso electrónico. Se consideró el salario integrado mensual, es decir, la suma del salario mensual más otras percepciones netas proporcionales a un mes calendario. Al salario integrado mensual se le aplicó un factor de ponderación de acuerdo con la zona geográfica del municipio en el cual está radicado el Tribunal Superior de Justicia local⁷. Se identificaron las entidades federativas con el monto mayor y el monto menor de remuneración a jueces⁸. El monto máximo menos el monto mínimo se convirtió en la máxima puntuación de 5. El resto de las puntuaciones de los salarios se obtuvieron en la ecuación siguiente:

$$\begin{array}{l} \text{Puntuación} \\ \text{sobre Salarios} \\ \text{de Jueces} \end{array} = \frac{(\text{SALef} - \text{SALmínimo}) * 5 / (\text{SALmáximo} - \text{SALmínimo})}{}$$

⁷ El ponderador del área geográfica económica C le corresponde un ponderador de zona de 1; al área económica B le corresponde un ponderador de zona de 0.95; y al área geográfica económica C le corresponde un ponderador de zona de 0.90.

⁸ Para efectos del cálculo de las puntuaciones, se suprimió la referencia a las entidades federativas de las que carecía de información, por lo que el menor presupuesto fue asignado a aquella entidad federativa de la que se contaba con información.

Donde:

SALef	= Salario integrado mensual en 2008 de la entidad federativa relevante.
SALmínimo	= Menor salario integrado mensual en 2008 de entre las entidades federativas.
SALmáximo	= Mayor salario integrado mensual de entre las entidades federativas.

Guías de Apreciación. Las guías de visita de apreciación a juzgados y salas tuvieron por objeto contrastar la percepción de abogados sobre las condiciones materiales, con la observación directa realizada por los encuestadores que viajaban a cada entidad para el llenado de las guías respectivas. Las guías de visita de apreciación incluyen la evaluación sobre:

- Las condiciones generales del juzgado o la sala⁹.
- La disponibilidad de equipo de cómputo¹⁰.
- El lugar para audiencias y las condiciones de su realización en juzgados.
- El área de archivo y consulta a expedientes en juzgados.

3. Aplicación de los instrumentos de recolección de datos

La aplicación de la mayoría de los Cuestionarios para Abogados fue presencial, individual y autoadministrada, en otros casos el encuestador acudió directamente al despacho del abogado para aplicar el cuestionario “cara a cara”. El proceso fue coordinado por encuestadores que viajaron a las entidades federativas para este efecto, y se llevó a cabo en la sede del Centro Bancario correspondiente. Cada cuestionario para abogados contaba con un folio previamente asignado y aquellos cuestionarios no utilizados fueron cancelados.

Las condiciones en las que se contestaron los cuestionarios fueron las siguientes:

Ninguno de los abogados conocía con anterioridad el Cuestionario para Abogados, ya que el cuestionario se les fue entregado al momento de la encuesta.

⁹ La calificación fue en base a una escala de 5-0 (donde 5 era excelente y 0 muy malo).

¹⁰ Las preguntas fueron cerradas (Sí o No). Donde a Sí se le daba una puntuación de 5 y a No de 0.

Los abogados encuestados se reunieron en una misma sala para responder. Y en otros casos se acudió a sus despachos para llevar a cabo la encuesta.

El encuestador dio las instrucciones para contestar el cuestionario.

El proceso de respuesta no podía interrumpirse y fue aplicado simultáneamente a todos los abogados¹¹.

Los cuestionarios destinados a los Tribunales Superiores de Justicia, por su parte, fueron remitidos vía correo electrónico y fax, estableciendo el plazo límite para la obtención de las respuestas.

Por lo que respecta a las guías de visita de apreciación a juzgados y salas, los encuestadores que aplicaron dichas guías en cada entidad federativa, las contestaron mediante observación directa de las condiciones materiales de los juzgados y las salas seleccionadas aleatoriamente.

4. Procesamiento de datos: captura y sistema

Los resultados de los cuestionarios y las guías de visitas de apreciación fueron capturados en una base de datos electrónica, creando plantillas de captura para cada tipo de cuestionario o guía. Para una mayor confiabilidad de la información incorporada en la base de datos, se realizó una auditoría de la captura para verificar que los datos en dicha base, realmente correspondiera a las respuestas de los cuestionarios.

A su vez, el procesamiento de datos fue realizado mediante un sistema de cómputo en el cual se llevó a cabo automatizadamente el proceso de ponderación de los resultados de cada entidad federativa correspondiente a 2008. A partir del resultado final de dicho procesamiento de datos, se realizó el ordenamiento que permite identificar la posición de las entidades federativas respecto a las demás y se elaboraron las distintas gráficas y tablas descriptivas. Ponderación de Resultados. El proceso de ponderación de los resultados de cada entidad federativa dentro del sistema de cómputo implicó tres momentos básicos que se explican a continuación:

Momento 1. Captura de datos de cada una de las respuestas de los Cuestionarios para Abogados, mediante la asignación de un valor entre 0 y 5 de acuerdo con las escalas predeterminadas para cada reactivo.

El siguiente ejemplo lo ilustra:

Pregunta 23. Los procedimientos establecidos para respetar el turno o asignación de juzgados son inalterables. (Componente “Imparcialidad en la designación de juzgados”).

Totalmente de acuerdo	5
De acuerdo	3.75
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	2.5
En desacuerdo	1.25
Totalmente en desacuerdo	0

Para la obtención del resultado se promediaron las puntuaciones que todos los encuestados, de cada entidad federativa, asignaron al mismo reactivo.

Momento 2. Ponderación de los indicadores (preguntas del cuestionario), componentes (subdimensiones), rubros (dimensiones) y temas (variables) (Ver Anexo I), mediante la asignación de un peso dentro de cada nivel (ponderación).

Peso dentro del componente. Cada una de las preguntas del cuestionario tenía un peso en el total del componente (subdimensión).

El indicador del ejemplo sobre los procedimientos establecidos para respetar el turno o asignación de juzgados representaba el 50% del componente, por lo cual la puntuación obtenida por la respuesta se multiplicó por 0.5.

De esta forma, si el promedio del total de respuestas fue 2.30 se multiplicó por 0.5, por lo que la puntuación derivada de esta pregunta dentro del componente “Imparcialidad en la designación de juzgados” fue de 1.15.

Finalmente, la suma de todos los indicadores ponderados que integran el componente (subdimensión) da como resultado el total del rubro (dimensión), en el ejemplo, “Percepción sobre imparcialidad en los procedimientos”.

Peso dentro del rubro. Cada uno de los componentes tenía un peso (%) en el rubro correspondiente.

¹¹ Todos los cuestionarios fueron aplicados en cada entidad federativa simultáneamente por el encuestador enviado por el ITAM.

En el ejemplo, el componente de la “Imparcialidad en la designación de juzgados” representa el 15% del total del rubro “Percepción sobre imparcialidad en los procedimientos”. El restante 85% de dicho rubro está formado por el 40% del componente imparcialidad de los jueces”, el 40% del componente “Imparcialidad de los magistrados” y el 5% del componente “Imparcialidad en la programación de las actuaciones judiciales”.

Suponiendo que la puntuación obtenida de la suma de las ponderaciones de cada uno de los componentes del rubro haya sido 4.00, su peso dentro de la dimensión (rubro) se obtendrá multiplicando $4.00 \times 0.15 = 0.60$.

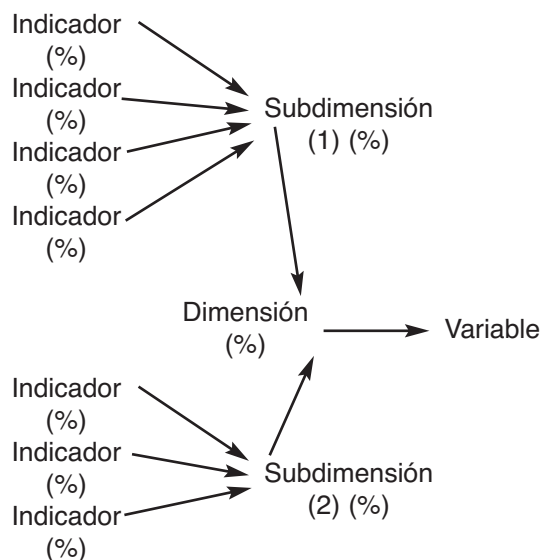
Peso dentro del tema. Por último, a cada uno de los rubros se les asignó un peso (%) dentro del tema general del que daban cuenta.

Continuando con el ejemplo, éste se refiere al tema Calidad Institucional que incluye los rubros “Calidad profesional de los juzgadores” (10%), “Calidad de las resoluciones” (10%), “Uniformidad de criterios” (5%), “Imparcialidad en los procedimientos” (15%), “Influencia del Ejecutivo en el desempeño de la función judicial” (10%), “Autonomía de los jueces y magistrados” (10%), “Condiciones profesionales para el ejercicio de la judicatura” (10%), “Estructura y funcionamiento de los tribunales y servicios auxiliares” (10%), “Controles y supervisión” (5%), “Eficiencia del Ministerio Público” (5%), e “Idoneidad de la legislación local para la celebración y ejecución de contratos mercantiles” (10%).

Supóngase que el rubro imparcialidad en los procedimientos haya recibido una puntuación de 3.75. Para obtener su peso dentro del tema Calidad Institucional se debe multiplicar $3.75 \times 0.15 = 0.5625$.

Síntesis:

El resultado de los temas para cada una de las entidades federativas implica mecanismos de agregación sucesiva de los datos que puede esquematizarse de la siguiente manera:



Momento 3. Integración de fuentes diversas. De acuerdo con el procedimiento anterior se procedió a integrar la información proveniente de: 1.- Los Cuestionarios para Abogados, 2.- Los cuestionarios para los Tribunales Superiores de Justicia, y 3.- Las guías de las visitas de apreciación de salas y juzgados.

Cuestionario para Abogados. Los resultados de los cuestionarios aplicados a abogados fueron la fuente principal de información para llegar a los resultados de este Estudio. Dichos cuestionarios fueron procesados de acuerdo con los criterios anteriores (para tablas de ponderación, ver Anexo I). Únicamente en el tema Suficiencia y Aplicación Eficiente de Recursos Humanos y Materiales, se les agregó datos de las visitas a salas y juzgados.

Ordenación de las Entidades Federativas. Para determinar la posición que ocupan las entidades federativas respecto a las demás en el componente o rubro de que se trate, se ordenaron de la mayor calificación a la menor. Cuando existían 2 o más entidades federativas con la misma calificación, entonces se les daba la misma posición y la siguiente calificación recibía el orden que le habría correspondido de no haber habido 2 o más entidades con la misma calificación. Por ejemplo, si en cierto componente, el Estado X y Y obtuvieron la calificación máxima de 5, y el Estado Z obtuvo la calificación de 3.75, entonces a los Estados X y Y se les asigna la posición 1 de 32, en tanto que el Estado Z recibe la posición 3 de 32. Esto permite que se reconozca la misma posición a las entidades federativas con la misma calificación y al mismo tiempo, evidencie la posición real que ocuparían las demás entidades federativas, de no haber sido por los empates en calificaciones. Cabe señalar que existen Estados que aparecen con la misma calificación y diferente posición, esto se debe a que para la publicación del presente Estudio se utilizaron sólo dos decimales, pero para la asignación de posiciones se utilizaron hasta 14.